

CASTELLÓN

## Castellón garantiza los grandes proyectos

El alcalde asegura la inversión en los edificios de Calatrava y Gehry pese a la anulación de Mestrets

06.11.08 -  
A. BURGOS | CASTELLÓN

"Entre todas las variantes posibles, no contemplamos la posibilidad de que no se ejecuten proyectos como la VIU o el Centre de Convencions". Así de categórico se mostró ayer el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, en torno al futuro del PAI Mestrets, después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anulara la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que incluye la urbanización de la zona.

Sobre las partidas previstas por el Consell en los presupuestos de 2009 para los proyectos que incluía la zona -sólo el Centre de Convencions de Santiago Calatrava y la sede de la VIU de Frank Gehry suponen 5,9 millones de los más de 12,5 previstos para la ciudad-, Alberto Fabra ratificó que "no hay duda de que ambas iniciativas se van a llevar a cabo y el pago por parte del Consell se hará efectivo como estaba previsto para redactar los dos proyectos". "Tenemos que ser respetuosos con la sentencia, pero tenemos derecho a utilizar los instrumentos que la legislación permite para hacer lo que creamos más oportuno y en eso trabajan los servicios jurídicos municipales, en colaboración con los de la Generalitat, para garantizar que el proceso culmine con la aprobación de todos los proyectos", agregó Fabra.

## **Contactos con los propietarios**

En cuanto a si el Consistorio se ha puesto en contacto con los afectados por el PAI Mestrets, el primer edil de la capital de La Plana reconoció que "ha habido una primera ronda de contactos con los propietarios y estos quieren que se ejecuten las iniciativas previstas".

El alcalde de Castellón recordó que el plazo para presentar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo "no expira hasta la próxima semana", en concreto, hasta el próximo martes. "Vamos a respetar esos plazos y no hagamos especulaciones, porque se pueden generar expectativas que luego podrían no cumplirse", manifestó.

En relación a la petición del PSPV, que ha reclamado en reiteradas ocasiones al primer edil de la ciudad que "pida disculpas públicamente" a los vecinos por el modo en que se ha tramitado el PAI, Fabra criticó que "quien debe disculparse es el grupo municipal socialista por oponerse y obstaculizar sistemáticamente todos los proyectos que suponen un crecimiento y una mejora para la ciudad". "Ahora resulta que aquellos que se definen como progresistas están defendiendo intereses privados y abandonando los intereses generales de la ciudad", acusó el alcalde de Castellón, en referencia al apoyo ofrecido por los socialistas a los afectados y a las críticas sobre el hecho de que éstos debían asumir las cargas por la urbanización de la zona. Al respecto, agregó que "las puertas del Ayuntamiento están abiertas y siempre estaremos dispuestos a hablar con los propietarios, que tienen que aportar los terrenos para que la ciudad siga creciendo bajo la premisa de conseguir lo máximo para Castellón en su conjunto".

Por su parte, el portavoz del PSPV en el Consistorio castellonense, Juan María Calles, ironizó sobre el hecho de que los populares defiendan el mantenimiento de los proyectos pese a la sentencia del TSJ. "Hace años que dejé de creer en la magia y, por parte de la Generalitat, hay un dinero presupuestado para un suelo del que no disponemos", dijo Calles. "La posibilidad de distribuir las cargas urbanísticas supondría eliminar proyectos de la zona y habría que aclarar qué es lo que se piensa mantener, dónde se traslada lo que no vaya ahí, cuáles van a ser las

permutas y a cambio de qué", agregó el edil socialista Juli Domingo, que también señaló que "Alberto Fabra se presentó a las últimas elecciones con el libro *La ciudad que yo quiero*, una ciudad que, como demuestra la sentencia, ahora no quieren ni los vecinos ni los tribunales y que en estos momentos sólo existe en su cabeza".

"En esa zona estaban proyectadas 6.000 viviendas, la mitad de VPP, y ahora la sentencia retrotrae la situación a cuando ese suelo estaba catalogador como rústico, lo que complica la situación de los propietarios, que no saben qué suelo tienen ni de qué patrimonio disponen", añadió Calles, que advirtió a Alberto Fabra de que "si el PAI sigue adelante y hay ciudadanos que se sintieran perjudicados, en caso de ganar en los tribunales el Ayuntamiento estaría obligado a pagarles indemnizaciones multimillonarias".

A su vez, el portavoz del Bloc, Enric Nomdedéu, insistió en que, "más allá de si el Consell mantiene o no las inversiones para los proyectos, aunque la sede de la VIU se pueda trasladar o el Centre de Convencions cambie de ubicación, lo que nos preocupa son esas 6.000 viviendas y más de 3.000 VPP que no sabemos cuál será su futuro".